

DILEMAS DEL NACIONALISMO OFICIAL MEXICANO

BERNARDO MABIRE

EL NACIONALISMO EN LA ERA DEL LIBRE COMERCIO

EL FUTURO DE LOS SENTIMIENTOS, IDEAS Y POLÍTICAS nacionalistas en México se ha vuelto objeto de preocupación especial, entre varios motivos por los efectos que ha tenido sobre ellos, o podría tener en el futuro, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que suscribió el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con dos de los Estados más opulentos del mundo. En la comparación entre los socios podría estar un principio de respuesta a la incertidumbre, que servirá de preámbulo a un breve repaso de la historia del nacionalismo oficial mexicano y de sus grandes dilemas en el contexto actual de intercambios más abundantes con el exterior y de presiones favorables a que se democratice el orden nacional, originadas dentro y fuera de nuestro territorio, pero enfrentadas a obstáculos formidables en ambas esferas.

A diferencia de los Estados Unidos y Canadá, cuya población se formó con oleadas migratorias numerosas y variadas, durante casi todo nuestro siglo la élite gobernante de México lo ha proclamado país mestizo, es decir país de síntesis que aspira a la unidad. No es que sus vecinos más prósperos en el norte de América —cuya actual fisonomía es producto de colonialismos muy diferentes del que practicaba España— hayan renunciado a la homogeneidad necesaria para afianzar el poder nacional. Lejos de eso, la han conseguido en mucho mayor grado que nosotros por la vía del desarrollo económico marcado, al que su propio legado colonial no puso traba, sino que lo facilitó.

Aun así, la economía más poderosa del planeta no ha logrado que la población negra se incorpore de lleno a los mejores ámbitos de la vida estadounidense. Ni qué decir de los grupos de raíz latinoamericana más dispuestos a adoptar la ciudadanía de la nación receptora —que no son todos los que hay— para denotar una asimilación a la sociedad anglosajona que no consiguen plenamente, porque siguen siendo objeto del rechazo de al-

gunos círculos hegemónicos. Ejemplos como éstos ponen en evidencia la disparidad entre los hechos observables y el mito del *melting pot*, que, para reconciliar la tensión entre la diversidad patente de los grupos demográficos en los Estados Unidos y la aspiración de uniformidad mínima que garantizara la cohesión social, solía proponer que comunidades muy heterogéneas, sin despojarse por completo de sus legados culturales de origen,¹ abrazaran valores uniformes derivados de la experiencia compartida en territorio americano, eufemismo de los que imponía en la práctica la comunidad anglosajona preeminente.

Más complejo es el caso de Canadá, donde la yuxtaposición de un colonialismo a otro originó el conflicto entre dos comunidades con idiomas diferentes, unidas por vínculos de dominación que a la vez las separaban, cuya convivencia en nuestros días se ha mantenido a base de definir la patria como bilingüe y bicultural, si bien esta fórmula no ha conjurado riesgos de separatismo, aunque no sea más que por las ventajas políticas que aprendió a obtener Quebec de la amenaza de escindirse.

Empero, la imagen de los Estados Unidos y Canadá sin duda es de firmeza institucional y éxito económico, cuya simbiosis con una admirable solidaridad social garantiza la buena marcha de ambos Estados. En contraste, los riesgos de que se desintegre un país mal articulado como México, donde la desigualdad extrema persiste y compromete por igual el antiguo objetivo de integración nacional y el más reciente de democratización, redoblan la fuerza del anhelo de unidad en el ideario estatal mexicano para compensar carencias en el plano concreto, lo que a su vez explica la brecha en aumento, incomparablemente mayor que en las naciones vecinas, entre la construcción imaginaria y la realidad empírica. A esta paradoja se suma otra: que en fecha muy reciente por primera vez tuvo cabida en la doctrina oficial mexicana cierta disposición a reconocer la pluralidad de tradiciones como alternativa legítima e incluso deseable, quién sabe si por obra de un remedo de convicción o sólo con el fin de legitimar las desigualdades sociales agudizadas a la sombra de un fetiche pseudoliberal, que justifica las diferencias de

¹ En los Estados Unidos la identificación de grupos sociales por su procedencia nacional, aunque ya estén bien incorporados a la sociedad dominante (se habla de “estadounidenses-italianos”, de “estadounidenses-alemanes”, de “estadounidenses-coreanos”, etc.), ilustra una actitud de tolerancia que se confirma con la aceptación de que la mayoría de estos grupos conserven por varias generaciones su primer idioma e incluso lo prefieran en el contexto familiar. En cambio, el repudio creciente al uso del español sugiere que la comunidad de raíz latinoamericana — y en especial mexicana — es objeto de desconfianza, quizá por temor a que mantenga vínculos demasiado estrechos con los países de origen (cercanos o contiguos), o tal vez por simple racismo. Si el nivel educativo promedio en los Estados Unidos fuera más alto, otra explicación posible sería la reticencia anglosajona a recordar el despojo territorial infligido a México.

fortuna como producto de méritos individuales y de paso brinda, así parezca ilógico, una razón adicional para cultivar, en otras parcelas del discurso político, ficciones de igualdad que contrarresten los rencores sociales.

Tal vez se refleje en esto una de las contradicciones medulares de nuestros últimos presidentes, originada en que su voluntad de limitar el papel del Estado en la economía los ha obligado a reprimir en ocasiones —y con más frecuencia a reformular— una parte del viejo credo nacionalista, aunque sin descartarlo por completo,² en virtud de que muchos de sus otros elementos —entre ellos el énfasis en la unidad— siguen siendo necesarios para apuntalar un sistema político que no puede ya fincar su legitimidad en la historia, porque esa fuente está agotada, ni tampoco en las elecciones únicamente, pues los hábitos e instituciones democráticos distan aún de consolidarse, no obstante el progreso que han significado los triunfos electorales de partidos opuestos al de gobierno.

INDIGENISMO, HOMOGENEIDAD CULTURAL O PLURALIDAD EN MÉXICO

La concesión ideológica de admitir como posible la diversidad cultural responde en parte a la sublevación en Chiapas —realmente fue unos meses anterior—, pero es letra muerta a varios años de que estalló ese conflicto, y tal vez convenga que siga siéndolo, porque las demandas de los líderes insurrectos podrían encerrar amenazas contra sus presuntos beneficiarios, toda vez que se basan en la petición de reconocer una multiplicidad de identidades y preferencias normativas peculiares, que garantizaría una Torre de Babel lingüística y legal, catalizador probable de una pulverización quizá peor que las fracturas actuales, para no hablar del desperdicio de recursos que implicaría implantar esa propuesta en zonas donde las prioridades no deberían incluir el fomento de idiomas casi muertos ni el de costumbres sociales y políticas arcaicas, no precisamente democráticas en el sentido usual de la palabra³ ni propicias a la modernización económica.

La atención desmesurada que ha recibido el caso de Chiapas, como si no hubiera pobreza y opresión en el resto del territorio, se debe en gran

² Escribí un artículo sobre este fenómeno: Bernardo Mabire, "El fantasma de la antigua ideología y su resistencia al cambio de la política exterior en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari", *Foro Internacional*, vol. XXXIV, núm. 4, octubre-diciembre de 1994, pp. 545-571.

³ En las poblaciones aisladas donde predominan los indígenas la autoridad tradicional se basa frecuentemente en las posesiones materiales, el prestigio social o incluso el linaje familiar, que tal vez coincidan con los criterios elitistas que tuvieron en su origen los sistemas democráticos, pero son antitéticos a las ideas de igualdad, meritocracia y dignidad individual tras el concepto contemporáneo de democracia.

medida a que los indios en México son la mala conciencia del país, lo cual explica la idealización de sus culturas para ocultar las miserias que padecen. Esta operación de camuflaje se remonta a la época de los primeros patriotas criollos,⁴ cuyo legado sentó una pauta para las élites culturales sucesoras, hasta la fecha proclives a identificarse con legados abstractos de culturas truncadas sin exhibir por eso compasión razonada frente a los indígenas vivos⁵ (a quienes revisten de valores que les son ajenos para enrolarlos en causas extrañas a su tradición),⁶ ni “defenderlos”, por ende, con verdadera eficacia. Peor aún, la sola idea de que estos grupos necesitan que se les defienda pone de manifiesto la persistencia de un paternalismo que los condena, como por ironía, a seguir en antiquísimas condiciones de sometimiento y manipulación.

La desventaja histórica de las minorías étnicas en México —a las que no redimió su participación en la guerra de Independencia ni el hecho de que Benito Juárez fuera indígena renegado— empeoró bajo el Porfiriato y explica en parte la Revolución. Al concluir la fase armada de este conflicto, pese a que no resultó un triunfador inequívoco, por razón natural las preocupaciones sociales de los ideólogos del movimiento quedaron plasmadas en un nacionalismo popular⁷ —contrapuesto al elitista de Porfirio Díaz— que cristalizó en la Constitución de 1917.⁸ En los albores del proyecto lo animó un fuerte impulso indigenista, que por primera vez guió reformas concretas

⁴ Esos patriotas, hijos de españoles nacidos en la Nueva España y deseosos de arraigar en ese territorio por medio de adquirir personalidad propia, adoptaron como marco de referencia el mundo prehispánico, cuya importancia equipararon a la de todas las otras grandes civilizaciones, como puede apreciarse con particular claridad en las obras de Francisco Javier Clavijero. Véanse Frederick C. Turner, *The Dynamic of Mexican Nationalism*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1968, pp. 23-27; Samuel L. Baily (comp.), *Nationalism in Latin America*, Nueva York, Knopf, 1971, pp. 7-10; David A. Brading, *Los orígenes del nacionalismo mexicano*, México, SEP, 1973, pp. 42-55 (Sepsetentas núm. 82).

⁵ La hipocresía mexicana se aprecia mejor en comparación con el caso de Perú, donde el indigenismo no prosperó en el arsenal ideológico de las élites, en virtud de que descendientes bien conocidos de los nobles incas eran una fuerza política tangible.

⁶ Un ejemplo es la presunción de que los pueblos indígenas tienen instintos ecológicos naturales, cuando en realidad sus prácticas agrícolas —sobre todo la quema de hierba y árboles— no favorecen la conservación del medio ambiente. Otra fantasía les atribuye predisposición a suscribir las causas feministas, pese a la evidencia de que por siglos las mujeres indígenas han sufrido los efectos de una organización familiar opresiva.

⁷ En razón de su origen ya mencionado, el nacionalismo en México —así como en el resto de América Latina— fue primero una doctrina de las clases altas, que obstaculizaron su difusión por temor a que adquiriese connotaciones sociales subversivas (Baily, *op. cit.*, pp. 11-16). Sólo en el siglo XX ese credo aristocrático pudo engendrar variantes populares, que adoptaron las masas urbanas en el contexto de la industrialización incipiente; véase Gerhard Masur, *Nationalism in Latin America*, Nueva York, The Macmillan Company, 1966, pp. 152-163.

⁸ Turner, *op. cit.*, pp. 53-61, 101-120.

en beneficio de seres vivos, pero se moderó a la par de la institucionalización de la política posrevolucionaria.

En efecto, por más que el nacionalismo popular insuflara vida a un pueblo aletargado con el fin de articularlo, que fue la herencia primordial del cardenismo, etapa de máximo auge de esa ideología, el régimen no consiguió encuadrar a la población entera en su esquema (justificado en virtud de que sólo la actividad organizadora del Estado podía contrarrestar la desmovilización secular de la sociedad), porque encontró oposición irreducible de los grupos (influyentes aunque minoritarios) no susceptibles de integrarse al pacto corporativo, que explica el giro conservador de los mandatarios siguientes. Manuel Ávila Camacho aceptó la misión de restablecer el “consenso” perdido,⁹ por medio de abandonar la sustancia, cuando no la apariencia, de las políticas cardenistas, para afirmar la alianza nacional como objetivo supremo que se alcanzaría al posponer todos los conflictos.

LA IDEA DE UNIDAD NACIONAL EN EL IDEARIO DEL ESTADO MEXICANO

Así pues, con la esperanza de combatir, a la par de otros, el antagonismo entre indigenismo e hispanismo, reminiscente de pugnas furiosas que debilitaron al país durante su primer siglo de independencia, las élites posrevolucionarias divulgaron, de los años cuarenta en adelante, la tesis debida a Vasconcelos que proponía la fusión de varias culturas (básicamente las prehispánicas y la española) como origen de la identidad mexicana. Por varios decenios esta visión orientó la gesta de autoridades en principio comprometidas con esfuerzos de integración nacional mediante políticas económicas y culturales que hacían énfasis en la unidad y aspiraban a crear acuerdo respecto a objetivos elementales.

Empero, el genio de los regímenes posteriores a Cárdenas consistió en mantener la retórica de la Revolución, sin importar que sonara hueca por momentos y en otras ocasiones pareciera creíble gracias a que los presidentes siguieron defendiendo un proyecto económico “patriótico”, fundado en la sustitución de importaciones y otras políticas que daban prioridad al mercado interno. La paradoja de un discurso igualitario que cobijó la concentración de la riqueza en el periodo de nacionalismo económico, y el uso de la mitología revolucionaria para legitimar privilegios del sector privado y de las burocracias oficiales, con el tiempo minarían la credibilidad del lenguaje nacionalista oficial, pero en su momento éste tuvo efectos estabilizadores, más aún porque la práctica que inspiró guardaba algo de congruencia con él.

⁹ Masur, *op. cit.*, pp. 83-92.

En efecto, a partir de los años cuarenta ciertos factores se mantuvieron constantes en la política nacional, por ejemplo, el papel del Estado como productor de símbolos patrios, conjugado con la supervisión (generalmente más moderada que la fantasía de omnipotencia a la que dio lugar) sobre el desarrollo económico, gracias a lo cual perduró un sentido de misión en funcionarios encaminados a la construcción nacional, por encima de variaciones en los matices de su mensaje nacionalista. De ahí que, hasta hace muy poco, la idea de síntesis demográfica y cultural —así enfrentase la evidencia de atroz fragmentación— respaldara en México un mito de unidad que por extenso periodo ocupó sitio de honor —y no lo ha perdido hasta la fecha— en la doctrina gubernamental, cuyo impulso conciliador deseaba que la mexicanidad se hubiera originado en la mezcla de culturas.

En otras palabras, si los nacionalismos por definición predicán solidaridad fincada en metas compartidas,¹⁰ la variante específica que desarrolló el sistema político mexicano después de Cárdenas magnificó el tema de unidad, con miras a instalar la función estatal en un terreno situado entre las posturas extremas de facciones radicalizadas de la élite gobernante, que era preciso reconciliar. De paso, la proclama de una posición de justo medio prometía seducir amplios segmentos de la opinión pública, sobre todo porque el marco de referencia invocado para unificar aspiraciones era la nación, entidad que por su naturaleza trasciende las preferencias políticas particulares.

Se podría replicar a lo anterior que el énfasis en la unidad es más propio de idearios derechistas que izquierdistas, pero en México ese tema se purificó de connotaciones partidarias gracias a la costumbre ya citada de añadirle, como condimentos que neutralizaban aromas conservadores, los emblemas de la Revolución. El resultado fue un platillo de sabor aceptable para muchos, es decir una síntesis notable de elementos antitéticos, provenientes de filosofías tan encontradas que parecían irreconciliables. Esta victoria indiscutible del sistema político aseguró que el nacionalismo oficial superase la dicotomía habitual izquierda-derecha y sirviera para incorporar (aunque fuera en parte) flujos de pensamiento y grupos sociales extremadamente heterogéneos a los que podrían considerarse corrientes dominantes de la vida nacional, bajo la dirección de un Estado que enarbolaba un proyecto englobador e inclusivo, al menos en sus promesas. La sabia estrategia, cabe añadir, despojó de banderas a la oposición en todo el espectro ideológico para facilitar el predominio absoluto del partido de gobierno.

¹⁰Frederick Hertz, *Nationality in History and Politics*, Londres, Routledge and Kegan Paul Ltd., 1944, pp. 29-41.

Fue tan eficaz esa magia que cautivó también públicos extranjeros, o cuando menos los domesticó, operación nada simple en vista del antecedente de conflictos con los Estados Unidos, que ha conferido al nacionalismo oficial mexicano una de sus justificaciones fundamentales. Es verdad que las circunstancias peculiares de la Segunda Guerra Mundial permitieron cooperación inusitada entre México y su vecino, y que en la posguerra ambos países alcanzaron un acuerdo bastante firme para evitar conflictos graves.¹¹ No es menos cierto que la contraparte de buscar autosuficiencia económica, en la era del nacionalismo, fue la defensa de la soberanía con una política exterior capaz de disentir de los Estados Unidos, enemigo externo por antonomasia. Con todo, la vocación antiyanqui de la prédica nacionalista siempre se distinguió por su ambigüedad, no por su radicalismo, en virtud de la expectativa de las élites locales de obtener apoyo de los Estados Unidos, que ha sido fenómeno recurrente en la historia mexicana.¹²

Dentro de los límites de un acuerdo tácito, por largo tiempo funcional, los Estados Unidos toleraban las peroratas a sabiendas de que no había razón para creerlas al pie de la letra, y México sabía que en sus peores crisis podía contar con el respaldo financiero (y varios más) del aliado "secreto". Aun así, entre nosotros permaneció la ilusión de un Estado omnipotente, sólida en mayor medida que el objeto idealizado, tanto así que logró parecer creíble allende sus fronteras y no ha sucumbido del todo a los esfuerzos de los últimos presidentes por combatirla en nombre de un proyecto novedoso para el desarrollo. Mejor dicho, la renuencia a transformarse, inherente al bagaje de antiguas creencias, probablemente haya obstaculizado los giros de la política exterior mexicana que se acentuaron a partir del sexenio de Salinas luego de un periodo de transición durante el gobierno previo, cuando la diplomacia se tornó discreta sin abandonar todavía sus aspiraciones de "independencia".

EL GIRO DE SALINAS Y SUS ESCOLLOS

Pero la determinación de Salinas que marcó el viraje decisivo de la política exterior, es decir la de estrechar vínculos con los Estados Unidos (signo de la disposición oficial mexicana a renegar de partes de la sustancia del anti-guismo nacionalismo, que no de la mayoría de sus formas), no se tomó con pri-

¹¹ Así lo expone en su estudio clásico Mario Ojeda, *Alcances y límites de la política exterior de México*, México, El Colegio de México, 1976.

¹² Véase una reseña de este fenómeno en Lorenzo Meyer, "Las crisis de la élite mexicana y su relación con Estados Unidos. Raíces históricas del TLC", en Gustavo Vega (comp.), *México-Estados Unidos-Canadá. 1990*, México, El Colegio de México, 1992, pp. 73-93.

sa ni con facilidad. Después de una etapa de vacilaciones,¹³ al acentuarse la vocación revisionista a falta de alternativas asequibles de cooperación internacional que subsanaran las carencias de la burguesía nativa, hubo remordimiento por romper con mitos antes sagrados, manifiesto en que la verborrea oficial —cada vez más apartada del ámbito concreto— siguió rindiéndoles homenaje. Y aun después de que el Ejecutivo se comprometió con el acercamiento formal a los Estados Unidos, en las declaraciones presidenciales proliferaron actos de alquimia verbal obstinados en resolver contradicciones entre el legado ideológico recibido y la voluntad de cambio selectivo. Uno de los más penosos fue el intento por armonizar las nociones, naturalmente incompatibles, de soberanía e interdependencia,¹⁴ con la esperanza de investir el nuevo programa económico de un sentido patriótico que no tenía de suyo, en todo caso no a la luz de la experiencia anterior o de su fábula. Esto requirió otro acto de magia verbal para redefinir el concepto de soberanía, por medio de procurar que el término dejara de hacer énfasis en el “enemigo externo” para volverse sinónimo de unidad política y eficiencia económica.¹⁵

Detrás del ímpetu de atribuir al nacionalismo una maleabilidad exagerada que hizo estallar el concepto, se perfilaba, con dejos burlones, el vigor de ideas tan arraigadas que no podían reprimirse del todo, menos aún porque pese a que una parte del viejo arsenal de postulados se había vuelto obstáculo para la acción del sistema, otra seguía siéndole útil. En consecuencia, el apego a nociones vaciadas de su contenido primigenio, pero atractivas por su envoltura, originó una fractura mayor que de costumbre entre la re-

¹³ Se creyó ver un augurio de continuidad (con respecto al sexenio de De la Madrid) en el hecho de que durante su primera gira internacional Salinas reiterase de modo casi obsesivo el tema de la integración de los países latinoamericanos, por ejemplo, cuando declaró que la intención de visitarlos antes que otros era “mostrar mi espíritu latinoamericanista y hacer saber que México tiene puestos los ojos en el sur”; véase “Entrevista concedida a periodistas venezolanos”, *El Gobierno Mexicano*, núm. 8, julio de 1989, p. 88; se recomiendan también, en el mismo número de esta publicación, “Discurso pronunciado en la Sesión Solemne del Congreso de la República de Venezuela”, p. 102, y “Entrevista concedida a corresponsales extranjeros”, p. 126.

¹⁴ “Señalo enfáticamente que participamos en la interdependencia, pero ratificamos nuestro carácter de nación soberana e independiente. Abrimos nuestra economía y tenemos vocación universal, pero ratificamos nuestro profundo nacionalismo”. Carlos Salinas de Gortari, “Primer Informe de Gobierno”, 1º de noviembre de 1989.

¹⁵ *Ibid.* En la misma ocasión Salinas declaró: “La defensa de la soberanía [...] no se libra solamente fuera de nuestras fronteras. La soberanía también se defiende con la capacidad política de un pueblo de tener una sola voz en la consecución de los intereses generales [...] Se fortalece con la generación de una capacidad productiva a escala de los empleos que se requieren, de los satisfactores que se necesitan y, sobre todo, del combate a la miseria, que nunca debe existir.”

tórica y la práctica, que reflejaba y retroalimentaba la paradoja de un gobernante más dispuesto a repudiar la intervención estatal en la economía que a prescindir de los viejos mecanismos para someter a las masas, actitud realmente sensata en la perspectiva del Estado, porque esos controles impedirían que se desbordara el descontento popular por los altos costos sociales de la nueva estrategia para el desarrollo. De ahí que el ritmo de las innovaciones políticas bajo patrocinio oficial fuese más lento, sin que dejaran de tener consecuencias importantes.

Lo anterior no significa que las reformas económicas de Salinas se apegaran fielmente al nuevo paradigma teórico, que habría asegurado correspondencia respetable entre la práctica y el discurso. Lejos de eso, juzgada con rigor, la presunta adhesión al liberalismo en el manejo de la economía fue muy discutible, porque no se permitió el juego de las fuerzas del mercado sino de manera casuística, en tanto las privatizaciones no se llevaron a cabo según reglas impersonales, de modo que concentraron la riqueza más allá de lo que habrían justificado los méritos objetivos de sus beneficiarios, como lo hicieron también los subsidios a las empresas privadas, que mantuvo el gobierno aunque no fueran compatibles con su nueva profesión de fe supuestamente ortodoxa.

Empero, por debajo de la leyenda de las metamorfosis de Salinas, que enamoró a nutridos públicos locales e internacionales ansiosos de maravillarse, pocas cosas fueron tan resistentes a la inspiración del liberalismo como la política mexicana, a juzgar por lo pausado que fue el desmantelamiento de la vieja organización corporativista. Los ideales democráticos resistieron también la manía del presidente de colocar gobernadores en el poder o destituirlos con libertad irrestricta, y el auge de la corrupción confirmó la continuidad de un autoritarismo despojado ya de su excusa tradicional, puesto que el Estado aspiraba a descartar sus antiguas funciones de construcción nacional, o quizá la ficción de las mismas.

En forma muy significativa, el vetusto celo nacionalista (vinculado con la antigua concepción de soberanía como defensa contra peligros externos) resurgía en los pronunciamientos de Salinas precisamente cuando algo amenazaba prerrogativas internas del Estado, a manera de confirmar una combinación poco apetecible de liberalismo económico y dureza política. Peor aún, se debilitó el hechizo del "Estado constructor" al tiempo que las diferencias sociales y culturales se acentuaban, y es muy posible que la ruptura de la ilusión, antiguo artificio de consenso, haya contribuido a los estallidos de violencia en el país. Se refuerza esta conjetura en razón de la dificultad para encontrarles sitio en la vida política a los grupos gremiales que poco a poco iban quedando relativamente libres de la tutela del Estado, sin que fueran aún capaces de recibirlos en su seno los partidos de "oposición",

porque la cultura y las instituciones democráticas seguían siendo embrionarias en el mejor de los casos.

Es de justicia admitir que durante la presidencia de Ernesto Zedillo se han visto avances en el terreno de la política, llamativos sobre todo por contraste con el balance poco alentador en otras áreas. La tiendecita del tendero y el casino siguen siendo la alegoría más apropiada de la economía mexicana, porque desde el repunte de la crisis a fines de 1994 —que cruelmente confirmó la persistencia de las causas estructurales del subdesarrollo— no se ha visto recuperación firme que sugiera solidez del aparato productivo. Tampoco hemos saboreado triunfos de política exterior, toda vez que la nueva alianza formal con los Estados Unidos no ha vuelto amable la postura de su gobierno frente a nuestra nación, menos aún la de su sociedad, sino que México parece atrapado más que nunca en el juego político interno estadounidense y quizá por eso esté sufriendo, a raíz de males como el narcotráfico, humillaciones impensables hace veinte años. En comparación puede hablarse de progresos de la política nacional, entre los que destaca la credibilidad en aumento de las elecciones.

Las que llevaron a Zedillo a su cargo de modo inusualmente limpio lo libraron del estigma que padeció su predecesor. Otras, en los estados y el Distrito Federal, que confirieron el triunfo a la oposición (principalmente a la derecha, si bien la izquierda se apoderó de la joya más preciada y riesgosa, es decir la ciudad de México), han modificado el panorama político hasta el punto de nutrir optimismo razonable con respecto a las perspectivas de la democracia. No obstante, mucho queda por hacer para afianzarla, de preferencia en áreas que sobrepasen la esfera estatal, porque las peores trabas para la plena democratización son las que pone la sociedad misma, no la maquinaria de gobierno. Tan es así que los innegables avances con miras a fincar la legitimidad de las autoridades públicas en la legalidad electoral no han servido —como habría parecido lógico prever— para revitalizar las instituciones ni aumentar su eficacia.

LAS AMENAZAS CONTRA LA DEMOCRACIA MEXICANA EN SU INFANCIA

Uno de los dos factores principales que ponen en peligro el orden institucional radica en el agravamiento de la criminalidad, ya que las mafias suelen encontrar procedimientos para traducir su inmenso poder económico en influencia política que termina por destruir la ley. El segundo elemento de riesgo es la permanencia de una cultura autoritaria en vastos grupos sociales, que por ese motivo son renuentes a respetar las reglas del pacto democrático incipiente, tanto más cuanto imaginan la democracia en cierne

como una concesión: ciertamente lo es, porque las numerosas reformas electorales que en el curso de más de veinte años crearon condiciones para el triunfo de la oposición fueron iniciativa propia de mandatarios sucesivos, más que respuesta a organizaciones disidentes muy endeblés todavía en su momento, pero el problema es que hoy día un cúmulo de mexicanos interpreten lo concedido como signo de debilidad del régimen y lo vean, por ende, con desprecio.

Las dos corrientes que amenazan la democracia confluyen en la conducta de aquellas fuerzas políticas más enajenadas del sistema, a saber, las que nutren un clima de violencia, entre las cuales figuran algunas que en otros tiempos cultivaban relaciones de clientela con el Estado mediante la red corporativista que se ha desmontado en parte. La subversión de los más radicalizados entre quienes no desean acatar las reglas de la política en vías de modernización, ya sea porque no las conozcan o no les reditúen ventajas, ha puesto en evidencia lo frágiles que eran en verdad las cadenas de mando de las altas jerarquías sobre las capas bajas de la pirámide del poder institucional y pseudoinstitucional. Eso aclararía por qué, al proseguir Zedillo con la demolición de los mecanismos que antes permitían al Estado neutralizar grupos disidentes en potencia por medio de cooptarlos e incluso de compartir con ellos una migaja de autoridad, se ha pasado a una situación en la que varios de los antiguos clientes se sublevan, a falta de prácticas e instituciones democráticas robustas que pudieran conjurar la violencia.

Por si fuera poco, incluso la oposición más civilizada, que se expresa por conducto de partidos no desprovistos de prestigio, es aficionada a tácticas autoritarias nada favorables a la democracia, quizá en reacción contra el éxito duradero del Estado en despojar a sus competidores de banderas doctrinales. Como el régimen político tuvo el acierto ya descrito de apropiarse temas nacionalistas conservadores que mezcló, para volverlos digeribles, con el ideario de la Revolución, prácticamente no quedaron lemas ni símbolos políticos disponibles para sus detractores, en todo caso no del tipo que pudiera cautivar electorados considerables. De ahí que la izquierda agrupada en el Partido de la Revolución Democrática recupere ahora viejos temas descartados del catecismo priista y sea afecta a chantajes, al cooperar con grupos de presión urbanos y rurales. Sin embargo, la derecha no ha padecido menos el despojo ideológico, y por no quedarle planes originales que proponer frente a gobiernos capaces de aplicar programas económicos semejantes a los que en otras regiones implantaron con brutalidad las dictaduras más reaccionarias, su salida es también, a menudo, una forma de radicalización que consiste en adoptar lemas de tonos arcaicos e inconfundiblemente religiosos, encaminados a expresar una identidad inequívoca.

LOS RIVALES DEL ESTADO EN LA GESTA DE CONSTRUCCIÓN NACIONAL

La tendencia señalada no es de sorprender, porque en los empeños de construcción nacional el único adversario histórico importante del Estado ha sido la Iglesia católica, cuya premisa es que la nacionalidad mexicana existe de suyo, cual derivación de la fe dominante que le confiere sustancia singular, y por ende no requiere de acción gubernamental para apuntalarla. Todavía extraordinaria en nuestros días, aunque tal vez vaya menguando, la fuerza de convocatoria del clero acentúa una rivalidad con las autoridades públicas que se ha manifestado de la manera más clara en la competencia por moldear la identidad colectiva mediante la educación.¹⁶

A primera vista parecería ilógico ese antagonismo en un país cuyos antecedentes históricos habrían podido auspiciar la conjunción natural de lealtades confesionales y patrióticas,¹⁷ sobre todo en virtud del papel del mito guadalupano en la lucha por la independencia nacional, mas fue precisamente el hecho de compartir unos cuantos símbolos lo que a la larga solidificó la discordia entre funcionarios civiles y religiosos, que no ha sido, por cierto, peculiaridad mexicana, pues guarda analogía con los casos de todas las comunidades católicas europeas donde la consolidación de un Estado laico fatalmente lo opuso al dominio eclesiástico.¹⁸ Cárdenas logró con el clero un acuerdo durable, pero hoy sigue latente en México una pugna entre el poder civil y la Iglesia, que amenaza con repuntar ahora que la segunda ha obtenido reconocimiento legal de personalidad y asumido un aire militante. La ironía de la lucha reside en que, desde los albores de la institucionalización de la política posrevolucionaria, los gobiernos han estado comprometidos con la defensa de un código ético que sin duda proviene del catolicismo, en tanto el gremio eclesiástico suscribe una idea de nación que culmina en la apología de un esquema corporativista muy similar al que creó en México y mantuvo con vigor la clase gobernante por más de medio siglo.

¹⁶ Con el pretexto de la introducción del libro de texto gratuito (a principios de los años sesenta) y de las reformas que modificaron su contenido (principalmente en 1974 y 1992), han estallado polémicas con respecto a la educación, que han producido debates sobre la legitimidad y el papel del Estado en la construcción nacional. La Iglesia católica siempre ha tenido injerencia notable en estas controversias (ya sea en forma directa o por conducto de organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia), encaminada a reforzar su poder político.

¹⁷ Turner, *op. cit.*, pp. 136-144.

¹⁸ Éste fue el caso de Francia, donde la Revolución instauró un orden republicano que hubo de combatir la influencia de la Iglesia para lograr la formación de ciudadanos que transfiriesen su lealtad primaria a la nueva autoridad laica, bajo el supuesto ideológico de que la expansión plena del individuo dependería del vínculo con su Estado-nación. El otro ejemplo destacado es Italia, cuya unificación tardía enfrentó la oposición de un clero apegado a su ventajoso papel de factor de unidad social en un contexto de fragmentación del poder político.

De igual manera, las posibilidades de cooperación entre las élites políticas y económicas sufren del antagonismo recurrente —y a largo plazo creciente— entre el Estado y los empresarios. Si el primero ha sabido afirmar su potestad cada vez que ha impuesto políticas contrarias al interés de los magnates, ellos se han especializado en la represalia temible de retirar sus capitales del país. También esta situación es paradójica, porque no hay demarcación tajante entre las familias política y empresarial, sino que existen intercambios fluidos entre ambas, coincidencia de propósitos últimos y semejanza absoluta de los perfiles sociológicos. A esto se debe que el conflicto entre las dos en no pocos casos parezca artificial e invite a comparaciones con el teatro, donde los miembros de una misma compañía desempeñan papeles antagonicos de acuerdo con la obra que representan.

Así pues, las bases de avenencia —por no decir las similitudes de visión— entre el Estado y sus principales rivales (la Iglesia y los empresarios) podrían rebasar ampliamente lo que confesara cualquiera de las partes, de modo que parecerían absurdas las fricciones entre ellas, salvo que el Estado las buscara con sus contendientes selectos para después circunscribir las negociaciones a una disputa privada entre líderes, en tanto las fórmulas corporativistas (o sus remanentes) se aplicaran para lidiar con las masas marginadas de la política elitista. Sin embargo, como se ha visto, ambas vertientes de la fórmula han sufrido desgaste que indica la necesidad de mutaciones. No por eso está garantizada, ni mucho menos, una fácil transición a la democracia plena. Las dificultades en esa vía no se limitan, ciertamente, al extremismo de algunos grupos ni al oportunismo de otros, más dispuestos al juego institucional: todos los participantes en la política deberían renovarse a sí mismos para corregir las deformaciones que le han infligido, aunque el Estado parezca su responsable único.

NACIONALISMO Y DEMOCRACIA

Pero si hace falta la reconstrucción simultánea de Estado y sociedad para conseguir avances en la lucha por afianzar, de manera también conjunta, la integración nacional y la democracia, objetivos indisolubles porque se retroalimentan, además de que ambos dependen de atenuar la desigualdad, una paradoja adicional radica en que los obstáculos habituales para reconciliar el nacionalismo con el pluralismo podrían ser especialmente graves en México, donde la construcción de la patria solía equipararse al reforzamiento del sistema político que al término de la Revolución se vio precisado a movilizar y organizar la sociedad con fines de integración. Este sistema, como cualquier otro, por naturaleza ha sido resistente al cambio genuino y

propenso al reformismo ecléctico para enfrentar las tensiones que desembocan en crisis esporádicas. Durante decenios el credo oficial identificó —y no ha dejado de hacerlo en nuestros días— la defensa de sus preceptos nacionalistas con el resguardo de la estabilidad. Basado en ellos, el régimen justificó su propio anhelo de supervivencia y legitimó su interés en asegurarse autoridad sobre el territorio nacional completo. Ese control por largo tiempo fue garantía contra la insurrección en una atmósfera de desigualdad extrema, causa y a la vez producto de la falta de integración nacional que no remediaban ni los actos ni las mejores intenciones de los mandatarios.

La inspiración conciliadora de sus postulados doctrinales ha propiciado la longevidad del sistema político. Otro factor la explica, que por más de sesenta años el afán casi obsesivo de tranquilidad se sublimó bajo pobres restauraciones del edificio político mellado, que cacarearon sus autores según los imperativos concretos y las modas intelectuales del momento. Si las reformas fueron en la práctica menos audaces que su augurio, no perdieron solidez ni eficacia las creencias edificadas sobre ofertas de renovación, a juzgar por la lealtad al sistema de un pueblo amante de promesas. De ahí que la verdadera meta de crear ilusiones recurrentes de innovación pueda haber sido la de vacunar al país contra las transformaciones ciertas. El juicio más severo destacaría el lado oscuro del nacionalismo oficial, manifiesto en que esta ideología quizá haya disfrazado la desigualdad sólo para volverla tolerable, por medio de crear una quimera de finalidades compartidas, de canalizar conflictos sin alterar en esencia el orden vigente y de mantener sometidos los grupos sociales marginados, nada de lo cual difiere mucho, por otra parte, de las funciones de todo gobierno eficaz: lo inaceptable en México sería la persistencia de la pobreza bajo un manto de hipocresía. En resumen, se garantizó estabilidad, pero menos sólida que su imagen, y desde hace varios años es obvia su fractura, además de que probablemente haya bloqueado el avance hacia la integración nacional y la democracia auténticas.

Incluso en nuestros días podría seguir vigente la paradoja que advirtió Robert Scott¹⁹ hace treinta años: que en México los mecanismos para preservar coherencia mínima en una sociedad profundamente desigual son los mismos que le impiden corregirse. La razón por la que se llegó a ese punto, valga repetirlo, es que después de la Revolución, cuando nadie más estaba en posibilidad de integrar el ente nacional, el Estado equiparó su fortalecimiento con el desarrollo de México. Estos objetivos se confundieron en el

¹⁹ Robert E. Scott, "Nation-Building in Latin America", en Karl Deutsch (comp.), *Nation-Building*, Nueva York, Atherton Press, 1966, pp. 73-74. Scott cita a Frank Tannenbaum, quien formuló la misma idea treinta años antes.

imaginario oficial, muy pronto también en el colectivo, por la proclividad del Estado a identificarse con la nación misma para propósitos de legitimación política, a falta de elecciones creíbles. Si la fórmula tuvo innegables efectos constructivos en el pasado, hoy han perdido energía sus justificaciones. No obstante, un problema mayor es que tampoco facilita la búsqueda del ideal democrático la flaqueza de una sociedad a la que dio forma el Estado, de los años treinta en adelante, para contrarrestar el efecto de siglos de desmovilización, pero al hacerlo forjó una relación tan firme entre una y otro que no ha podido relajarse. Éste es un motivo adicional de los límites imprecisos de los ámbitos público y privado —causa y efecto de subdesarrollo político— que pueden observarse empíricamente en las calles que clausuran los habitantes de las grandes ciudades (cuando no las arriendan desempleados o las invade el comercio ambulante, vestigio poderoso del aparato corporativo), así como en la permanencia de prácticas patrimonialistas del Estado que resguarda la población con su esperanza de recibir de él todo tipo de dádivas materiales. Entre nosotros, por desgracia, es muy raquítica la idea del bien común y su necesaria preeminencia.

Los tenues linderos que separan realidades objetivas de construcciones imaginarias se desdibujan más en México gracias a la habilidad del sistema político para embelesar con su retórica a un rebaño que desea la seducción, lo cual de paso borra más las fronteras entre gobierno y sociedad. La relación simbiótica de ambos se nota en que la oposición suele desplegar actitudes y tácticas autoritarias para vengarse del Estado todavía autoritario, obtener de él concesiones (a menudo informales) o simplemente derivar satisfacción psicológica perversa de despreciarlo y desafiarlo. Por eso el escenario político nacional es uno donde actúan grupos de interés, más que partidos, cuyas tácticas de ejercer presión para extraer ventajas no expresan la democracia en sus variedades más deseables.

LA INFUNDADA ESPERANZA EN EL EXTERIOR

Los apuros para romper dentro de México estos círculos viciosos llevan a preguntar si podrían contribuir a ese objetivo influencias externas. La pregunta es menos descabellada de lo que parece si uno recuerda que regímenes muy disímiles han coincidido en depositar su fe en los lazos con el exterior como receta para alcanzar objetivos nacionales, que no deja de ser desconcertante en una atmósfera tan patriótica. Nuestro sistema ha sido hábil, por demás, para vender sus fantasías a los extranjeros, que han “comprado” epopeyas con entusiasmo desbordante y contribuido así a vigorizarlas, ya sea la de los “impulsos revolucionarios” de Luis Echeverría en la

primera mitad de los años setenta o la del apego estricto de Salinas al liberalismo.

El punto anterior desemboca en un breve comentario sobre la forma en que se articulan la política interna y la exterior. Se ha dicho que en México la segunda sirve para crear consenso dentro del país, pero como hay evidencia de que tiene, más bien, efectos divisivos, tal vez fuera preferible proponer que los giros de la diplomacia aspiran a recuperar el apoyo de grupos de interés con los que desea reconciliarse un gobierno, usualmente a base de sugerir que transita de un extremo a otro del espectro ideológico, confiado en restablecer así el equilibrio que pensaba perdido. Esa búsqueda de conciliación podría conceptualizarse también como esfuerzo de los presidentes por compensar fracasos de su agenda nacional con una actuación en foros mundiales que aspira a ser brillante, pero casi nunca lo consigue.

Otro nexo muy obvio entre la política interna y la exterior es que, al margen de voluntades gubernamentales, la segunda tiene contribuciones por hacer al crecimiento de la economía mexicana. Ésta siempre ha requerido elementos foráneos, si bien han variado las modalidades de la consecuente subordinación que administran la Secretaría de Relaciones Exteriores y varias más. Frente a las crudas realidades de la dependencia perdurable, los tecnócratas han pasado de la rebeldía a la resignación, confiados en obtener el mejor partido posible del trato con las naciones desarrolladas. El problema es que quizá no baste esa disposición complaciente para ganar las ventajas deseadas, y que ha sido muy audaz descartar fórmulas diplomáticas tradicionales sin que haya otras de eficacia probada para sustituirlas.

La evidencia acumulada en los últimos años parecería demostrar por enésima ocasión, contra la terquedad de las infundadas esperanzas mexicanas, que el remedio para los problemas internos no vendrá jamás de fuera. Al margen del TLCAN, cuya incapacidad natural para inducir relaciones más cordiales entre los signatarios se ha comprobado ya, en el futuro se podrá seguir contando, de manera vergonzosa, con el vital auxilio de los Estados Unidos cada vez que en México se derrumbe el sistema financiero. Empero, la alianza comercial no garantiza la salud de nuestra economía, pues no hay certeza de que las ventas al exterior, por más que aumenten, lleguen a brindar por sí solas al aparato productivo el impulso del que dependería el ritmo de crecimiento mínimo para proveer los empleos necesarios.

Menos aún debe esperarse en el terreno político. Los optimistas incorregibles podrán seguir creyendo en analogías —sin respaldo empírico— entre la Unión Europea y el área de libre comercio en el norte de América, e insistirán en imaginar la posibilidad de que México se contagie de la mí-

tica democracia estadounidense, así como los regímenes europeos avanzados dieron un impulso benéfico a España, Grecia y Portugal para erradicar sus dictaduras como requisito para integrarse al club civilizado. Sin embargo, el hecho es que, en sus arreglos con naciones frágiles, los Estados Unidos jamás han vacilado en entablar alianzas con los líderes más despóticos, porque los guía la visión —más allá de la defensa retórica de la democracia— de que son dignos de su apoyo los gobiernos fuertes, no los legítimos, en cuanto respetan más los intereses de la gran potencia. Tampoco hay motivo para suponer que la cultura popular yanqui sea vehículo de difusión internacional de las mejores tradiciones del país que la vende, ni que los mexicanos emigrantes a la economía vecina entren en contacto con ellas para reproducirlas en nuestro territorio cuando regresen.

OBSERVACIONES FINALES

Por lo visto, es ineludible encarar la necesidad de proseguir la modernización de México —entendida como triunfo de la democracia, con todo lo que implica para la política y la economía— mediante esfuerzos autónomos que no se conformen con una sustitución de mitologías. Esto no será fácil, por lo arraigada que está la costumbre de abusar de la fantasía —casi más en la política exterior que en la interior— con miras a consumir la integración nacional, que ciertamente se nutrirá de la imaginación, como ha sido el caso en todo tiempo y sitio,²⁰ pero exigirá también muchas condiciones materiales para cuajar.²¹ Carecería de sentido aventurar un juicio ético

²⁰ Véase la obra de uno de los últimos grandes teóricos del nacionalismo, Benedict Anderson, *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Londres, Verso, 1983. Según el autor, en todas partes la nación tuvo que ser en gran medida una comunidad imaginaria, debido a la imposibilidad de que cada individuo conociera realmente el espacio físico de una entidad tan grande y estableciera relaciones tangibles con aquellos que aceptó definir como sus conciudadanos. Esto pudo ocurrir a medida que las élites de un ente nacional en ciernes desarrollaron capacidad para imaginar las actividades rutinarias de sus semejantes. Contribuyó a esto la circulación de periódicos y novelas, por excelencia medios técnicos para representar a la nación.

²¹ Karl Deutsch llama “asimilación” y “movilización” los dos fenómenos que culminan en la integración nacional. La primera, relativa a la cultura, se reconoce en que los miembros recién llegados a una comunidad nacional estén dispuestos a comunicarse con el núcleo mayoritario de la población y a adoptar sus pautas de conducta, aunque esto los obligue a reprimir partes de su cultura de origen (los ejemplos más claros del fenómeno pueden observarse en la historia de los Estados Unidos). En cuanto a la movilización, es producto del desarrollo económico, social y técnico en el que se apoya la vida material de toda sociedad. Véanse, de este

sobre los efectos del nacionalismo oficial que hoy se cuestiona, porque todo el bien que hizo era indisociable de todo el mal que haya podido hacer. En el fondo no existían alternativas, porque sólo un liderazgo con impulsos patrióticos tenía probabilidades de superar el letargo generalizado. Y si en la actualidad el desmantelamiento de ese viejo nacionalismo se antoja lento, parcial y problemático, se debe a la falta de opciones de eficacia comparable. Más aún, la raíz de la dificultad para el cambio ha de buscarse en la sociedad mexicana entera, no sólo en el Estado al que se asemeja, porque la falta de una cultura democrática y legalista en el pueblo es lo que ha vuelto tan laboriosa la transición a la modernidad política.

Aunque se admita que por ahora no son ya propicias las circunstancias para el predominio estatal en la vida pública (que en México fue ilusión más que realidad, incluso durante el apogeo nacionalista), no queda exento el gobierno de sus obligaciones naturales en un contexto mundial donde el Estado-nación sigue siendo el marco de referencia: está muy lejano el día en que se discutan los peligros, para la soberanía mexicana, de compartir una moneda única con los Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Sigue pues en manos de las autoridades políticas la responsabilidad primordial de mejorar las condiciones de vida de sus electores, lo cual brinda razones para demandar una estrategia económica más nacionalista que las aplicadas desde hace varios sexenios con resultados modestos, no un retorno a la protección comercial (que concentra la riqueza e impone al consumidor productos caros y deficientes), pero sí medidas que reanimen el mercado interno e impulsen la creación de empleos. De igual manera, un encargo intransferible del Estado es el de formar ciudadanos mediante políticas culturales que reconozcan las bondades de la igualdad legal de todos, fundamento de una homogeneidad cultural que induzca intercambios y movilidad de los recursos disponibles, porque de eso depende, a su vez, la plena integración nacional aparejada al desarrollo económico y político.

Tenga o no el Estado mexicano el buen sentido de inspirarse en los cursos de acción nacionalista que en su momento siguieron todos los países exitosos, a la sociedad corresponde afirmar su independencia —si en verdad quiere demostrar la mayoría de edad— por medio de superar las limitaciones de su progenitor, sin renegar injustamente de las herencias benéficas. Valga más hablar de la sociedad a secas que de la so-

autor, *Nationalism and its Alternatives*, Nueva York, Knopf, 1969, pp. 20-32; *Nationalism and Social Communication*, Cambridge, The Technology Press of the MIT, 1953, pp. 94-103.

ciudad “civil”, adjetivo del que hoy se abusa demagógicamente —sin el menor respeto por el significado histórico de la expresión— para construir una entelequia que, al abarcarlo todo, se vuelve nada y sólo sirve para encubrir las malas costumbres de una población que ha vivido en simbiosis con sus gobernantes. En los esfuerzos por remediar la ignominia moral que, lejos de limitarse al Estado, es el estigma de una mayoría de mexicanos, infortunados hijos del colonialismo, sería realista atribuir responsabilidades no tanto a las masas embrutecidas por su miseria cuanto a las élites que no han sabido redimirlas. Toda nación próspera gestó oportunamente una burguesía emprendedora, orgullosa de la cultura local, y una intelectualidad bastante distinguida para asegurar el florecimiento de las ideas y las artes. Con patrocinio oficial, en México proliferaron caricaturas de ambos grupos, pero no han estado a la altura de la misión que en otras latitudes cumplieron sus modelos. Es tiempo de que por fin la lleven a cabo, para legitimar sus privilegios y demostrar madurez.

Conviene referirse a un problema final, que la transformación simultánea de todas las élites públicas y privadas —única manera de romper el círculo vicioso de connivencia entre gobernantes y gobernados, que ambos han ocultado bajo recriminaciones mutuas muy lesivas para el espíritu cívico— tal vez requiera cuestionar las ideas preconcebidas sobre la esencia de la mexicanidad, porque no basta con tener rasgos distintivos para afirmar una identidad propia que guíe un proyecto singular: hace falta aún que las peculiaridades del carácter nacional sean felices, o cuando menos apropiadas a los objetivos que se anhelan. Por esa razón, si el futuro al que aspiran los ideólogos más generosos de México es el de un ente democrático apoyado en una economía vigorosa, que no dependa ya de la venta de materias primas, ni de la especulación financiera, ni de la industria maquiladora, sino que logre emplear la abundantísima mano de obra joven y producir los bienes que demanda una población golosa de satisfacciones materiales, entonces cabe preguntar cuán deseable será seguir cultivando ciertas actitudes y símbolos que hasta la fecha se proclaman —con razón o sin ella— emblemáticos del alma patria. La pregunta se justifica en virtud de que algunos legados culturales deberían olvidarse discretamente, en vez de fomentarlos, si hubieran dejado de ser idóneos para los objetivos de la comunidad, lo que da argumentos en pro de inventar un nacionalismo lanzado al futuro más que atado a la historia.

Dado que son inevitables los estereotipos, porque en el fondo los invocamos siempre que intentamos definirnos, vale la pena referirse a dos de los más comunes, quizá muy destructivos en potencia bajo los afectos

que inspiran. Uno es el relativo a la charrería, que conserva poder sentimental en un país donde no predomina ya la población campesina, y tal vez debiera inquietar, por ser la estampa edulcorada de una organización social crudelísima. El otro es el mito de Guadalupe, instrumento para la misericordiosa idealización de un pueblo con madre, pero sin padre, que arroja un velo de pudor sobre el trauma del origen nacional. ¿Seguirán haciendo falta en nuestro medio las mentiras piadosas? ¿No sería bueno ejercitar capacidades de olvido?